



Al servicio de la paz y la justicia

SALA DE DECISIÓN CIVIL

Medellín, veintinueve (29) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Proceso:	Verbal (declaración de pertenencia)
Demandante:	Sandra María Restrepo González
Demandado:	Herederos indeterminados de María García
Radicado:	05088 31 03 001 2023 00229 01
Tema:	Rechazo de demanda
Decisión:	Confirma auto.
Providencia:	Interlocutorio No. 012 de 2024.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación formulado por la demandante, en contra del auto proferido el 11 de septiembre del 2023 por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Bello, mediante el cual se rechazó la demanda.

I. ANTECEDENTES.

1. ACTUACIÓN PROCESAL.

1.1. AUTO IMPUGNADO.¹

Previo inadmisión², el juez de primera instancia rechazó la demanda, argumentando que no se había satisfecho el primero de los requisitos atinentes a que, como se estaba invocando la declaratoria de *prescripción*

¹ Cuaderno Primera Instancia, actuación N° "006RechazaDemanda.pdf"

² Cuaderno Primera Instancia, actuación N° "003InadmiteDemanda.pdf"

ordinaria se debía anexar, conforme artículo 764 y siguientes del Código Civil, el *justo título* con base en el cual se sustentaba la misma, dado que la promesa allegada no es un título traslativo, y menos en este caso que la promitente vendedora no es la verdadera propietaria, ni se acreditó su posesión.

1.2. EL RECURSO³.

Solicitó el apoderado judicial la reposición de dicha decisión y, en subsidio, que se concediera la apelación, argumentando que la compraventa de la posesión se hizo partiendo de la buena fe e insistiendo en que el tema concerniente a si existe o no posesión por parte de la actora, no es asunto de admisibilidad de la demanda, porque dicho tópico constituye un tema objeto de debate en el proceso; por ende, manifiesta que lo realmente relevante es que la demanda se realizó en cumplimiento del artículo 82 del Código General del Proceso.

De igual manera, trajo a colación lo tipificado en el artículo 1502 del Código Civil, indicando que la validez del título, se debatirá probando la posesión tanto de la vendedora, como de la compradora en el desarrollo del proceso, por consecuencia, el justo título se presume válido, partiendo de la buena fe de las intervinientes en el contrato de compraventa anexado.

Por último, insiste en lo regulado en el artículo 768 de la norma *ibídem*, anunciando la buena fe que reviste a su poderdante en la compra realizada *de la posesión* objeto de la Litis.

Resuelto desfavorablemente el primero de los recursos, se concedió el que ahora requiere nuestro análisis.

³ Expediente Digital, Cuaderno C01 Principal, Folio 43.

II. PROBLEMA JURÍDICO

Corresponde determinar en el sub judice, si en efecto, es viable la revocación del auto que rechaza la demanda, en observancia del incumplimiento de requisitos no estipulados tácitamente en el artículo 82 del Código General del Proceso.

Para resolver lo propio, habrán de tenerse en cuenta las siguientes:

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia. Es competente la Sala, conforme el numeral 1° del artículo 321 del Código General del Proceso, para conocer del recurso de apelación sobre la providencia objeto de reparo, por cuanto es el superior funcional del Despacho que profirió la sentencia impugnada.

3.2. Rechazo de la demanda por requisitos no estipulados en artículo 82 del Código General del Proceso.

Resulta claro que, para la admisión de la demanda, la misma debe contar con los requisitos estipulados en el artículo 82 y siguientes del Código General del Proceso, y en esa medida, por lógica, en principio, solo a la verificación de tales presupuestos debería dedicarse el Juez en el examen liminar para su admisibilidad. Más, cómo desconocer que no siempre el legislador puede alcanzar a regular todos los eventos posibles derivados de la variada casuística de los conflictos sociales e interpersonales, e incluso culturales en muchos otros casos, siendo en esos eventos en los que el juez está llamado a realizar una lectura integral del ordenamiento jurídico, acudiendo a la doctrina y a la jurisprudencia, a efectos de llenar esos vacíos o algunas que de allí se puedan derivar.

De hecho, ante normas tan cerradas como la que se acaba de citar, bajo la figura del Juez director del proceso, siendo él en quien radica la responsabilidad de otorgar la *tutela judicial efectiva* que demandan los asociados y, por tanto, también el único destinatario de todo el caudal

probatorio que se pueda recaudar en el juicio, pues que al fin es a él, y a nadie más a quien corresponde persuadir para efectos del reconocimiento del derecho reclamado, debería permitírsele entonces, sin temor, o prevenciones, la posibilidad de otras lecturas a ese tipo de disposiciones; eso sí, solo en la medida que vayan encaminadas al único propósito que debe guiar siempre su qué hacer misional, administrar pronta y cumplida justicia; y como advertimos, eso será realidad en la medida, que además de garantizar al justiciable el acceso al estrado judicial, se le asegure también un debido proceso sin dilaciones injustificadas, y en especial se le conceda una *tutela judicial efectiva*, es decir, que no solo no adolezca de vicios que la puedan invalidar, si no, y por sobre todo, que pueda materializarse, que puedan realizarse los derechos en ella reconocidos .

Una lectura en la perspectiva anterior, permite que entonces el juez pueda advertir otros elementos, incluso de orden sustancial que, *ex ante*, deban satisfacerse para el buen suceso del proceso, y no que simplemente se derroche la jurisdicción, bien maltrecha y congestionada como se encuentra y que, incluso, la parte dilapide aún más su patrimonio asumiendo gastos y costos del proceso, y hasta comprometiendo su tranquilidad y sosiego asistiendo a audiencias y luego a la espera de una justicia que seguramente no llegará en los términos que se espera, para que solo a la vuelta de dos, tres, cuatro o más años, mediante *sentencia*, como a gritos y en masa claman muchos, como el acá recurrente, se le diga que no le asiste la razón porque no acreditó lo que le correspondía. Seguro estoy que tal proceder no es el que le da vigencia al superior derecho del *debido proceso*, y menos materializa los principios de eficiencia y eficacia que gobiernan la Administración de Justicia (Art. 4, Ley 270 de 1996).

En este caso particular, en el farragoso y poco técnico escrito de demanda, el abogado de la demandante afirmó contar con un *justo título* (hechos 1 y 2), que además era poseedora de buena fe, es decir regular. En ese contexto, si por ejemplo, acudimos al artículo 84 del Código General del Proceso, que hace referencia a los anexos de la demanda, puntualmente el numera 2º, dice que a ella debe acompañarse “La prueba de la existencia y representación de las partes y **de la calidad en la que**

intervendrán en el proceso, en los términos del artículo 85.", y si bien tal disposición, en puridad, hace referencia al estado civil de las personas, cuando de las naturales se trata, no resulta descabellado entender que si el demandante afirma tener la **calidad** de poseedor regular, pero sobre todo expresamente señala que cuenta con un *justo título*, pues que lo aporte, al fin, es en esa condición en la que afirma va a actuar.

Ahora, habrá quienes piensen que el anterior entendimiento de esa norma resulta muy forzado para sustentar lo que se pretende; pero resulta que acuñando lo anterior, el mismo artículo 84 en el numeral 3° señala sin ambages, también como anexo necesario de la demanda "***Las pruebas extraprocesales y los documentos que se pretenda hacer valer y se encuentren en poder del demandante***", con lo que no hay duda, es suficiente el fundamento legal de tal exigencia.

Sin embargo, aun obviando esas disposiciones, de la sola noción del **juez director del proceso**, que no puede ser apenas una muletilla que se invoca y se repita sin sentido, emergen las facultades para obrar como acá se dispuso porque el legislador así lo facultó expresamente el artículo 44 del Estatuto citado, que al referirse a los poderes de *ordenación e instrucción* expresamente en el numeral 2°, le ordena *rechazar cualquier solicitud que sea notoriamente improcedente...* y, por supuesto, que la demanda es una solicitud, la más importante.

Es que, si el demandante afirma ser poseedor con *justo título*, y con base en ello solicita únicamente la prescripción ordinaria, y tal cosa no se acredita, el fracaso de su pretensión se avizora ineludible. Y si bien es verdad, ello es un aspecto de prueba que podría lograrse en el curso del proceso, no se puede perder de vista que la única oportunidad probatoria cierta del demandante es la demanda misma, y por ello el legislador le impone ese deber de anexar, desde el inicio, las pruebas que estén en su poder. Acá la demandante afirmó contar con el documento aludido, pero en el acucioso control de admisibilidad la señora Juez encontró que ello no era así, y por eso lo exigió, y al no allegarse, hizo bien en rechazar la demanda, pues esa pretensión en esas condiciones resultaba abiertamente infundada, ningún

sentido tenía dar trámite a la misma en perjuicio de los principios ya señalados en líneas anteriores, creando una falsa expectativa en el demandante que luego agrandaría más su frustración por no poder formalizar su propiedad, no por lo menos en la forma y manera que su abogado lo está solicitando.

Es que el señor apoderado, una vez tuvo conocimiento de la exigencia inicial que le hizo el despacho para que aportara lo que en verdad es un *justo título*, en vez de haber ido a restudiar el tema conforme a los lineamientos legales y jurisprudenciales que allí mismo se le advirtió, y que luego, al resolverle la reposición, se le explicitaron ampliamente, se empecinó, contra toda lógica jurídica, en afirmar lo contrario, asumiendo una actitud beligerante al punto de agotar esta instancia aun en perjuicio suyo dada la prolongación innecesaria de la situación.

El asunto es simple, es necesario que quien decida litigar en asuntos de esta naturaleza, por lo menos examine antes, cuáles son los *presupuestos axiológicos* que le corresponde dejar acreditados, muchos con la presentación de la demanda misma, para que así no tenga un procesamiento traumático de su pretensión, pero sobre todo que verifique la fundabilidad de su petitum acorde con el respaldo probatorio con el que cuenta y en verdad pueda recaudar durante el juicio para que no vea truncada su aspiración. Y, si acaso hubo falencias en ese laborío, una vez advertido por el Juez de la causa, con humildad, actúe en consecuencia sin prevenciones, pues en muchos eventos lo que en verdad se está haciendo, como en este caso, es ayudar a lograr el propósito de la demanda. Ahora si es que no fuere posible satisfacer la exigencia referida, como acá, el señor abogado debía saber que ante la ausencia de ese justo título, que no es como él lo concibe, sino como se le ha explicitado, tenía la opción de reformar la demanda para invocar, en vez de la prescripción ordinaria, la extraordinaria, obvio, teniendo en cuenta que el término de posesión que debe acreditar es superior (Art. 2532, Código Civil) y que, entonces, la demanda también debe dar cuenta de esos actos posesorios en particular durante ese lapso de tiempo y, en el evento de requerir sumar la posesión de su antecesora, le corresponde igual afirmar en qué

consistieron los mismos y, luego, acreditarlos durante el juicio por cualquier otro medio probatorio, si es que de entrada no se contaba con otras pruebas documentales por ejemplo, pero que de la misma manera tiene el deber de señalarlos en la demanda -esos medios probatorios-, siendo a eso también a lo que se refirió la señora Juez, no que se probara en la demanda la posesión como equivocadamente se entendió, sino eso, que se relacionaran uno a uno esos actos posesorios y cómo, luego, se iban a probar.

Es que litigar tiene sus desafíos, no solo corresponde conocer bien las instituciones jurídicas de orden sustancial que regulan el derecho pretendido, sino también las normas propias de cada juicio, que no se pueden verse como talanqueras, sino más bien como garantía para poder realizar aquellos derechos. Como bien dice el aforismo popular, “¿de qué sirve tener el derecho si luego no se sabe hacer valer en el juicio?”.

Así las cosas, reproche alguno merece la decisión del Juez de instancia debiendo confirmarse íntegramente, y en contrario, se insta con todo comedimiento al señor apoderado recurrente a obrar de conformidad con las reflexiones antes señaladas. Sin costas por cuanto no se causaron.

IV. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la **EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN**, en sala unitaria,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR el auto objeto de impugnación, proferido por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Bello, el 11 de septiembre de 2023, mediante el cual rechazó la demanda, de acuerdo con las razones expuestas en este proveído.

SEGUNDO: En firme lo aquí resuelto, devuélvase el expediente digital al juzgado de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

BENJAMÍN DE J. YEPES PUERTA
Magistrado

Firmado Por:
Benjamin De Jesus Yepes Puerta
Magistrado
Sala Civil
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **1ee0e886a9f909a2834a05db23eb3a400c6c158120b1880b71dbb42bc72bd902**

Documento generado en 29/02/2024 11:33:49 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>